

LA CRISIS SILENCIOSA DE LA PEDAGOGÍA: UN FRACASO DE POLÍTICA PÚBLICA

POR EDGARDO ARAYA ROJAS,
LICENCIADO EN EDUCACIÓN.-



Por estos días, cuesta encontrar buenas noticias en el mundo educativo. Y una de las más preocupantes ha pasado casi en silencio: la drástica baja en las matrículas en carreras de pedagogía. Según datos publicados por El Mercurio el 14 de abril de 2025, entre 2018 y 2019 la matrícula cayó un 43,3% y la oferta educativa disminuyó en un 17,9%. Este año, apenas se registraron 13.288 nuevos estudiantes en pedagogía, una cifra que contrasta fuertemente con los más de 19 mil matriculados entre 2016 y 2018. Y eso sin considerar la creciente deserción durante la carrera y en los primeros años de ejercicio profesional.

No se necesita ser un experto para concluir que la política pública orientada a fortalecer la formación docente fracasó. Uno de los ejemplos más evidentes es la postergación desde 2019 del aumento en los puntajes mínimos de ingreso a 528 puntos. Aquello, que pretendía elevar los estándares de calidad, terminó siendo una estrategia ineficaz, mal implementada y desconectada de la realidad.

Es tiempo de revisar el enfoque. No se trata de imponer barreras de entrada, sino de hacer de la pedagogía una carrera lo suficientemente atractiva como para que los estudiantes con altos puntajes quieran postular voluntariamente. Solo así, y no por decreto, se elevará el promedio de ingreso. Si no entendemos esto, seguiremos atrapados en una lógica de exclusión que no resuelve el problema de fondo.

Y el problema de fondo es serio. ¿Quién quiere hoy ser profesor o profesora en Chile? ¿Quién quiere entrar a una sala de clases sabiendo que debe enfrentar no solo el desafío pedagógico, sino también la violencia escolar, el abandono institucional y la precariedad laboral? Muchos jóvenes simplemente no están dispuestos a cargar con esa mochila.

La violencia en los colegios no es un fe-

nómeno aislado: es una expresión del deterioro social y del avance del crimen organizado en nuestras comunidades. El Estado ha sido incapaz de responder a tiempo y con decisión. Pretender que los colegios sean islas de paz en medio del caos es ingenuo. Las escuelas están tensionadas, los docentes agotados, y las vacaciones, en extinción.

A esto se suma la injusta brecha salarial entre niveles educativos. Hoy, el valor hora mínimo nacional para docentes de educación parvularia y básica es de \$18.978, mientras que en enseñanza media es de \$19.968. Una diferencia absurda, considerando que todos tienen una formación y exigencia profesional similares. Esta disparidad se arrastra en las estructuras salariales y perpetúa desigualdades que desalientan la vocación, sobre todo en los niveles más críticos de la formación.

Por último, la Ley de Inclusión, si bien loable en su intención, está mal diseñada. No contempla recursos suficientes para abordar situaciones complejas, como condiciones psiquiátricas severas o estudiantes con necesidades educativas especiales. Aunque existen límites legales —cinco estudiantes con necesidades transitorias y dos con permanentes por curso—, en la práctica los equipos docentes deben responder a todos los casos, sin el respaldo ni las herramientas necesarias. El resultado: aulas desbordadas y profesionales al borde del colapso emocional.

¿Hasta cuándo vamos a seguir postergando una reforma profunda al sistema de formación y ejercicio docente? Si no se abordan estas problemáticas con seriedad, ninguna campaña de admisión, puntaje mínimo ni mejoras salariales va a revertir la tendencia. La pedagogía está en crisis, y con ella, el futuro de nuestra educación.

Ya es hora de tomar decisiones que resuelvan los temas de fondo y no de ideologías.